INFORME ESPECIAL

EMPEORA LA SITUACION HUMANITARIA Y SE INTENSIFICA EL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Bogotá, Colombia, 3 de marzo de 2005

Intensificación y degradación del conflicto armado interno en los últimos meses. Desde diciembre de 2005 hasta hoy el departamento de Nariño ha sido escenario de una fase de intensificación y degradación del conflicto armado, ya que en este departamento confluyen múltiples dinámicas de la guerra y se dejan ver los efectos no buscados de políticas de seguridad aplicadas por el gobierno nacional en el sur del país. Algunos de los factores en que se refleja la crisis humanitaria y el escalamiento del conflicto, sobre los cuales las organizaciones abajo firmantes queremos llamar la atención, son:

- Creciente **traslado de cultivos de uso ilícito** desde el departamento de Putumayo después de las intensas fumigaciones iniciadas en el año 2000 en ese departamento, con el consiguiente incremento de una dinámica de violencias asociadas al control hegemónico del comercio ilegal y de las distintas rutas estratégicas tanto para la economía ilegal, como para el posicionamiento de los grupos armados.

Esta situación no sólo ha intensificado la confrontación armada sino que hace más confusa la línea divisoria entre la estructura del narcotráfico y las dinámicas emergentes del conflicto armado, sobre todo en la región del corredor pacífico (comprende desde el municipio de Tumaco en Nariño, frontera con Ecuador, hasta el municipio de Juradó en Chocó limítrofe con Panamá, pasando por el municipio de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca). Los enfrentamientos, masacres y desplazamientos forzados en esta zona están relacionados con la disputa por el control de puertos claves para la comercialización de estupefacientes, armas y precursores químicos entre otros factores asociados a la economía ilegal. Los índices de violencia en estos puertos alcanzaron niveles alarmantes durante el 2005. Buenaventura reporto el mayor incremento en la tasa anual de homicidios con un 12% más para el 2005 respecto del 2004, según cifras de la Fundación Seguridad y Democracia. En Tumaco fueron incautadas 15.1 toneladas de cocaína avaluadas en 325 millones de dólares, constituyéndose en el mayor cargamento decomisado en la historia de la lucha contra le narcotráfico en Colombia[1] . Relacionado con la lucha por el control del negocio de las drogas se han cometido muchos crímenes en este departamento, es el caso de la masacre de una misma familia en el municipio de Llorente por retaliaciones entre grupos de narcotraficantes[2].

- **Ataques indiscriminados a poblaciones por parte de guerrilla y paramilitares** que han cobrado innumerables víctimas entre la población civil. Según denuncias de las comunidades de los municipios de Ricaurte, Los Andes y Barbacoas, la guerrilla ha cometido continuos ataques a los puestos de policía que han cobrado víctimas entre la población civil y fuerza pública, se han reportado daños inmuebles y eventos que afectan la movilidad al interior y hacia afuera del departamento como incineraciones a carros y ataques con cilindros. De otro lado, en el municipio de Los Andes, se reportó una incursión de las AUC el día 12 de

[1]Diario El Tiempo "**ES EL DECOMISO DE COCAÍNA MÁS GRANDE**" 14 de mayo 2005. Página 1-6.
[2] Diario El Tiempo. **"MASACRADA UNA FAMILIA EN TUMACO"** 18 de Octubre 2005. Página 7.

noviembre durante la cual atacaron y dieron muerte a dos policías en el sector del Mercado de la cabecera municipal e hirieron a una niña.

- **Ataques a bienes protegidos de población civil**, no solamente a la infraestructura vial y energética de la región. Recientemente las acciones están afectando principalmente a escuelas en medio de una ofensiva militar de la guerrilla contra la militarización y operativos que adelanta el Ejército en el marco del Plan Patriota, – la más reciente es la operación antinarcóticos "El Nevado" iniciada el 17 de noviembre en la vereda el Mataje del municipio de Tumaco. Como consecuencia de intensos enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros el 19 de febrero en el sector rural del municipio de los Andes, se vieron impactadas por las acciones bélicas las escuelas de las veredas Cordilleras (esta quedó totalmente destruida), las de Quebrada Honda, Esmeralda, Palacio y Paraíso, en donde hasta la fecha se encuentran totalmente suspendidas las jornadas escolares.

- **Los bloqueos** a los que se ha visto sometida la población civil se empeoraron con las amenazas de paro armado de las FARC durante la última semana del mes de febrero y se configura una situación de confinamiento total en algunas veredas debido al crecimiento de **áreas minadas** –principalmente en las zonas rurales de Los Andad Sotomayor- por parte de la guerrilla del ELN y las FARC. Estas acciones tienen efectos indiscriminados, impiden la libre movilización a los habitantes del departamento en rutas que comunican zonas rurales con cascos urbanos, impiden el normal desarrollo de actividades necesarias para el sostenimiento de las familias que viven en zonas veredales y han cobrado víctimas inocentes incluidos varios menores de edad[3].

- **Desmovilizaciones de grupos de Autodefensas sin un seguimiento claro por parte del gobierno nacional**, que han resultado en el reagrupamiento de miembros de estas estructuras paramilitares en mafias de crimen organizado. A pesar de la desmovilización de 677 miembros de las Autodefensas pertenecientes al Bloque Libertadores del Sur en julio del 2005, hoy es conocida la presencia de grupos armados ilegales reagrupados en el "Bloque Nueva Generación de Autodefensas" en las veredas del Municipio de Cumbitara (Curiaco, la Planada, Los Guabos, Guayabal). De acuerdo al Sexto Informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), las desmovilizaciones colectivas concurren en los siguientes fenómenos: 1) el reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; 2) reductos que no se han desmovilizado; 3) la aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados.

  En el departamento de Nariño, se corrobora la existencia de un grupo conocido como "Mano Negra" o "Águilas Negras", cuya influencia va desde el municipio de

[3] Esta situación se ha presentado en el municipio de los Andes Sotomayor donde se han reportado aproximadamente 15 personas afectadas por estos artefactos y otras tantas que han visto como muere su ganado y animales domésticos. Según información de la Campaña contra Minas, estas son: María del Socorro Benavides 56 años, Miguel Angel Rojas 25 años, Segundo Rojas 31 años, José Alirio Caratar 25 años, José Reinci Caratar 21 años, José Luis Oviedo11 años. En el departamento de Nariño durante el 2005 se reportaron 20 victimas de minas y solo en los primeros 3 meses del 2006 se reportaron aproximadamente 13 víctimas de minas antipersonales y artefactos explosivos.

Leyva, municipio de El Rosario y municipio de Taminango (Nariño) y en algunos municipios del departamento del Cauca. Este grupo opera en el área de influencia del antiguo Bloque Libertadores del Sur (BLS). Se reportan actividades de reclutamiento de nuevos combatientes, tanto de desmovilizados como de población civil de la zona. Según información proporcionada a la OEA, después de la desmovilización, el grupo 'Mano Negra' intenta retomar el monopolio de la compra de coca[4].

- De otro lado, son cada vez más frecuentes las denuncias sobre **retenes ilegales** impuestos por guerrillas y paramilitares en la vía que conduce de Pasto a Tumaco, que es una de las principales rutas de transporte de precursores químicos y de droga que sale de Colombia por el corredor del Pacífico a Centro, Norte y Sur América.

- **Enfrentamientos** continuos en el municipio de Los Andes Soto Mayor entre AUC y FARC por el control de zonas rurales. Las autodefensas están realizando incursiones armadas a las zonas rurales de este municipio para expulsar a la guerrilla durante los meses de febrero y marzo.

- **Operativos militares del Ejército colombiano** cuyos efectos indiscriminados ponen en tela de juicio la distinción entre objetivos militares y bienes protegidos de la población civil, entre combatientes y no combatientes. Los operativos del Ejército de carácter contra-insurgente durante los cuales han ocurrido bombardeos indiscriminados y desplazamientos forzados masivos, se han desarrollado con mayor intensidad en los últimos seis meses en Nariño. Los principales son: Operativo Gladiador, Camawari, Libertad[5] y El Nevado. Estas operaciones y la contraofensiva de la guerrilla, se desarrollan en territorios de resguardo y están afectando principalmente a comunidades indígenas[6].

- La forma en que se están desarrollando estos operativos militares del Ejército colombiano está resultando en **la invasión del espacio aéreo del país vecino de Ecuador** como lo ocurrido el 25 de enero de este año cuando las Fuerzas Armadas de Colombia violaron el espacio aéreo de Ecuador durante una

---

[4] Sexto Informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Mision de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). 1 de marzo 2006.

[5] Operación Libertad que se adelanta desde el 3 de abril en municipios de Ricaurte, Mallama y Altaquer, municipio de Barbacoas. Operación Gladiador desde el 16 de junio en los municipios de Ricaurte y Barbacoas.

[6] El 15 de junio en desarrollo de la operación Gladiador fue asesinado el señor Germán Efraín Guango, miembro del resguardo de Pialapi – Pueblo Viejo a manos del Ejército nacional. El cuerpo presentaba heridas con arma de fuego, arma corto punzante y arma contundente, según consta en el protocolo de necropsia efectuada el 18 de junio por Medicina Legal. Sin embargo, el Ejército reportó la muerte del civil como un error debido "a las condiciones climáticas, la geografía del terreno y el nerviosismo propio de un operativo como este". El 9 de julio fue asesinado por las FARC el indígena Genaro Enríquez García sin que se hayan esclarecido las circunstancias en que ocurrió el hecho. Estos hechos están afectando bienes y población civil del resguardo Indígena Awá del municipio de Ricaurte y de la comunidad indígena los Pastos en municipio de Mallama. En comunicado a la opinión pública los indígenas AWA del municipio de Ricaurte denunciaron asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias (más de 60 personas), desapariciones forzadas, es el caso de Pedro Nel Paí Pascal, tratos crueles e inhumanos y el desplazamiento de más de 1400 personas, todos estos hechos ocurridos durante los mencionados operativos del Ejército. Las denuncias se refieren también al saqueo y destrucción de bienes de la población civil, como las escuelas, por parte de las tropas del Ejército, así como señalamientos a los miembros de la comunidad indígena como colaboradores de la guerrilla.

persecución a guerrilleros de las FARC, quienes habrían cruzado la frontera para refugiarse en campamentos en el lado de la parroquia general Farfán[7].

Desplazamientos forzados

Como consecuencia de esta escalada del conflicto, la población civil se ha visto obligada a desplazarse para proteger su vida.

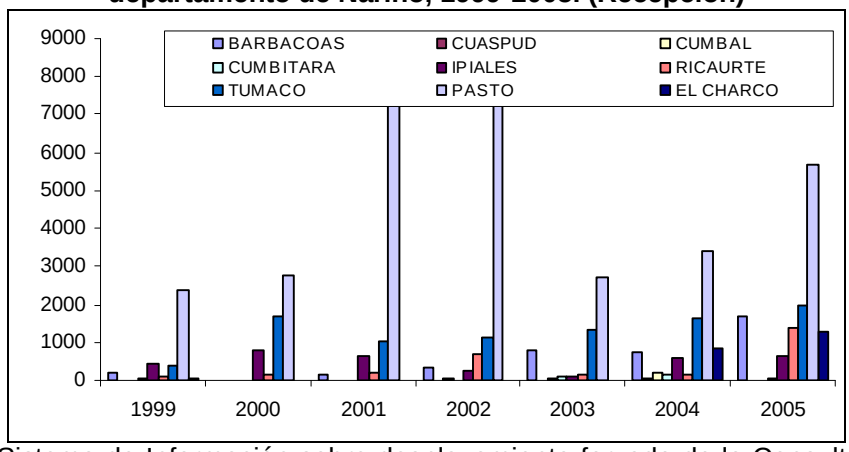
Según el Sistema Único de Registro (SUR) las cifras acumuladas de personas en situación de desplazamiento a corte del 31 de enero de 2006 ascienden a **37.427** en el departamento de Nariño, y según CODHES esta cifra asciende a **79.436** personas. Organizaciones no gubernamentales del orden local calculan que a Pasto desde noviembre del 2005 han llegado aproximadamente 5 mil personas de otros municipios y de zonas rurales huyendo de la violencia (Ver Gráfico 1).

Los municipios más afectados por el desplazamiento y donde se observa un incremento en el número de personas desplazadas asentadas en cabeceras municipales, son aquellos ubicados en áreas donde se han llevado a cabo operativos militares del Ejército y de la Policía Nacional, donde la ofensiva militar de la guerrilla ha sido más intensa, donde se han desmovilizado bloques de autodefensas, donde se reporta una mayor área cultivada de coca y/o amapola, donde se concentran actividades de acopio, procesamiento, comercialización y transporte de estupefacientes. Estos son los municipios de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas e Ipiales. Los municipios de Pasto, Tumaco, Barbacoas y Ricaurte se encuentran entre los 50 municipios más afectados por el desplazamiento (número de personas desplazadas que llegaron a estos municipios).

[7] Según fuentes oficiales en Ecuador, un helicóptero Arpía de la Fuerza Aérea Colombia (FAC) incursiono en al vecino país y abrió fuego sobre La Bocanada del Río Bermejo, en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia. De acuerdo con la Cadena Caracol Noticias del 31 de enero del 2006: "Los pobladores de Sucumbíos aseguran que el pasado sábado en la mañana, unos 300 militares colombianos llegaron al río San Miguel y abrieron fuego contra guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se habían adentrado en su territorio: 'La situación empeoró 30 minutos después, cuando los helicópteros, un avión fantasma y un avión artillado persiguieron a los insurgentes en territorio ecuatoriano', dijeron los pobladores al diario ecuatoriano El Comercio". En respuesta, el gobierno de Ecuador emitió un comunicado de protesta al gobierno colombiano, quien inicialmente negó que el hecho hubiera sido una incursión militar pero que muestra unas relaciones cada vez más tensas. Ver http://www.caracolnoticias.com/nacional/noti_nacional.asp?id_sw=66974

Gráfico 1.

Número de personas desplazadas que llegan a municipios fronterizos del departamento de Nariño, 1999-2005. (Recepción)

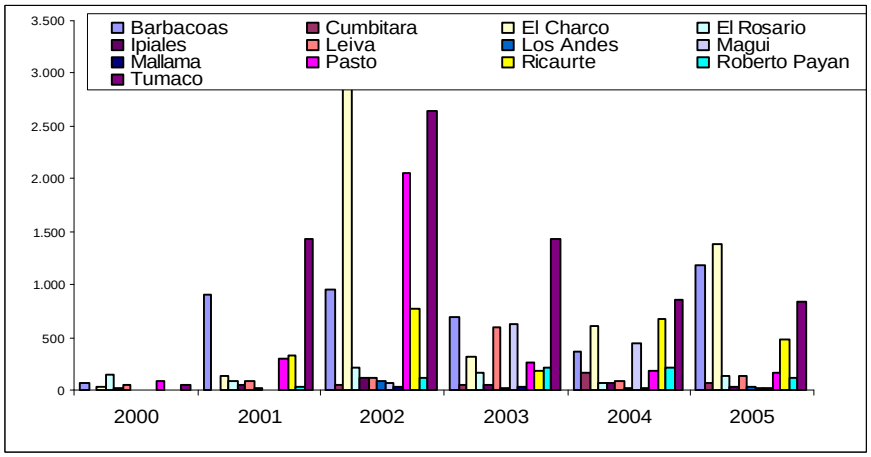


Fuente: Sistema de Información sobre desplazamiento forzado de la Consultoría para los derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Incremento
BARBACOAS	185	0	150	326	788	719	1683	134%
CUASPUD	0	0	0	0	0	41	0	-100%
CUMBAL	0	0	0	29	60	219	17	-92%
CUMBITARA	50	0	12	15	80	137	62	-55%
IPIALES	465	770	663	266	98	577	621	8%
RICAURTE	85	170	182	716	125	163	1375	744%
TUMACO	405	1658	1032	1144	1318	1645	1994	21%
PASTO	2369	2750	8129	7601	2697	3393	5666	67%
EL CHARCO	67	0	0	0	0	855	1270	49%

Fuente: Sistema de Información sobre desplazamiento forzado de la Consultoría para los derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

GRAFICO 2: Número de Personas desplazadas. Municipios expulsores de población en el departamento de Nariño. 2000-2005



Fuente: Sistema Único de Registro S.U.R., Fecha de reporte: Febrero 07/2006

Según datos de la Consejeria para la Acción Social del nivel nacional, los principales municipios expulsores del departamento de población a causa del conflicto armado para el año 2005 son: El Charco de donde huyeron 1.375 personas, Barbacoas de donde salieron 1.185 personas, Tumaco de la cual huyeron 838 personas, Ricaurte de donde huyeron 484 personas. Datos que convierten estos municipios en expulsores y receptores a la vez de población en situación de desplazamiento.

Sólo entre diciembre del 2005 y lo que va corrido del 2006 se han presentado desplazamientos masivos que afectaron aproximadamente a 800 personas en los municipios de Mosquera, Francisco Pizarro[8], Policarpa, El Rosario y Leiva. En sector rural del municipio de Tumaco, Bocas de Guandipa se desplazaron 123 familias entre el 10 y el 16 de enero. Otros casos contemplan desplazamientos durante intensos enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros entre el 22 y el 25 de febrero en el sector rural del municipio de los Andes (176 familias, 740 personas abandonaron sus lugares de residencia en un solo evento).

Situación de refugio

Pero la crisis no para aquí. Los efectos del conflicto armado están afectando cada día más al vecino país de Ecuador y las dimensiones regionales de la crisis humanitaria son cada vez más evidentes. Solo durante noviembre del 2005, por lo menos mil personas cruzaron la frontera huyendo de los combates que entre el Ejército colombiano y las FARC se libraban en zona rural del municipio de Tumaco[9]. Algunas recibieron ayuda humanitaria de emergencia, otras regresaron a sus lugares de vivienda y se calcula que por lo menos una tercera parte decidió permanecer en Ecuador. La protección y la atención de estas personas por parte del gobierno ecuatoriano no sólo enfrenta limitaciones presupuestales sino que reporta un alto subregistro, toda vez que de estas mil personas apenas 200 decidieron solicitar asilo ante el Estado ecuatoriano, menos de la cuarta parte del total de personas en situación de refugio. Las demás se encuentran en situación migratoria irregular o retornaron a una situación donde la seguridad es aún más incierta hoy que cuando abandonaron la región.

La respuesta a esta situación por parte del gobierno ecuatoriano es el refuerzo militar en la frontera como estrategia de contención del conflicto colombiano y defensa de la soberanía nacional en una guerra que no respeta límites. En la Parroquia El Carmelo, ubicada en la provincia del Carchí, límite con Nariño, el Ejército ecuatoriano decidió reforzar el pie de fuerza. Los habitantes de frontera han hecho saber su preocupación por los hechos registrados del lado colombiano, motivo por el cual insisten en la presencia permanente del Ejército Nacional de Ecuador en la frontera con Colombia. En la provincia del Carchi se vive una tensión constante desde el mes de diciembre de 2005 cuando iniciaron los combates entre el Ejército colombiano y la guerrilla de las FARC.

Los puntos más sensibles son las parroquias El Chical, Maldonado y Tufiño, al noroeste de la provincia del Carchi[10]. Esta situación está afectando las relaciones

[8] En estos dos municipios el 4 de diciembre se presentó un desplazamiento masivo de 35 familias. Del 10 al 16 de enero se presentó el desplazamiento de 623 personas afrodescendientes pertenecientes al Consejo Comunitario ACAPA. Estas personas fueron atendidas por CICR y Acción Social de forma rápida.

[9] En desarrollo del operativo anti-narcóticos "El Nevado" se produjo el desplazamiento dentro y fuera del país de alrededor de mil personas, en su mayoría colonos y un ataque de helicópteros artillados que, según el gobierno del Ecuador cruzaron la frontera y violaron la soberanía del vecino país.

[10] www.elcomercio.com. "350 militares recorren las vías ilegales de El Carmelo", versión electrónica de fecha *1/13/2006*.

binacionales y la protección de la población civil que en medio del conflicto no tiene otra opción que cruzar la frontera para proteger su vida.

Crisis humanitaria sin respuesta.

CODHES, La Asociación MINGA y la Corporación ACCION ANDINA COLOMBIA quieren llamar la atención de la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos, el sistema de Naciones Unidas, el gobierno nacional, agencias humanitarias. Para ello:

- Alertamos a las distintas organizaciones, agencias humanitarias y organismos internacionales con presencia en la zona, de esta situación y señalamos que actualmente se configura una aguda crisis humanitaria en la región que plantea retos inmediatos para las políticas de seguridad del gobierno nacional, quien insiste en mostrar información parcializada sobre los éxitos de estas estrategias a la opinión pública, entregando información incompleta a los medios de comunicación.

- Hacemos un llamado sobre la necesidad de una respuesta urgente por parte de las distintas agencias humanitarias para proteger, acompañar y atender a la población civil víctima del conflicto armado interno en Nariño.

- Insistimos en la importancia de una acción coordinada del sistema de Naciones Unidas para la zona que identifique la magnitud de la crisis (regiones y sectores sociales afectados) y movilice respuestas urgentes.
- Reclamamos un pronunciamiento por parte del gobierno nacional y de la comunidad internacional comprometida en el seguimiento a los procesos de diálogo y negociación entre grupos armados ilegales y el gobierno nacional, sobre esta situación específica. Que se reconozca la continuidad de prácticas de guerra por parte de los grupos desmovilizados y de otros que aun no se han desmovilizado pero participan de diálogos con el gobierno nacional, quienes siguen infringiendo el Derecho Internacional Humanitario y atentando contra la vida e integridad personal de la población civil de Nariño.

- Insistimos en la necesidad que los grupos armados (FARC, ELN, AUC, Fuerza Pública) respeten y reconozcan los principios del DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

- Hacemos un llamado al gobierno nacional y a la oficina de ACNUR en Colombia para que se elabore un plan especial para los casos de retorno de población en situación de desplazamiento (desde otras regiones de Colombia o desde Ecuador) que disminuya los niveles de riesgo y lleve a cabo un seguimiento de los estándares mínimos de seguridad para estas personas que deciden regresar a sus lugares de residencia.

- Subrayamos la situación de especial vulneración de derechos y de alto riesgo en que se encuentran las personas que han sido víctimas de **minas**, las personas desplazadas, las personas en situación de refugio en el vecino país, las personas que quieren retornar, los niños, las niñas y jóvenes que habitan en las zonas rurales y que son víctimas de presiones por aporte de actores armados para que se vinculen al conflicto armado, colaborando con alguna de las partes enfrentadas. Estos grupos poblacionales requieren una política de prevención, protección, atención y restablecimiento de derechos, urgente y con enfoque diferencial.

- Ponemos a disposición de agencias humanitarias, comunidad internacional, gobierno nacional, instituciones estatales encargadas de la protección de los derechos humanos, Sistema de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y organizaciones sociales, los esfuerzos, el recurso humano y la capacidad instalada que estén a nuestro alcance para agilizar una respuesta pronta y coordinada que contribuya a mejorar los niveles de prevención, protección, atención y restablecimiento de derechos de la población civil del departamento de Nariño que se encuentra en medio del conflicto armado.

Asociación para la Promoción social Alternativa, MINGA
Corporación Acción Andina Colombia
Codhes

Mayor información en:
fronteras@codhes.org
www.codhes.org
Bogotá, Colombia, 3 de marzo de 2005